

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL
MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada Ponente.

Apelación – Auto	
DEMANDANTE	JUAN DE JESÚS LÓPEZ MARULANDA
DEMANDADO	AFP PROTECCIÓN S.A.
RADICADO	05001-31-05-010-2012-00743-03
TEMAS	Graduación de las costas
DECISIÓN	Mantiene valor fijado

Medellín, veintitrés (23) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Estudiado, discutido, y aprobado en Sala virtual.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 “*Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica*”, en concordancia con los Acuerdos expedidos por Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y surtido el traslado a las partes en los términos reglados, procede la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín a proferir la decisión de segunda instancia dentro del presente proceso ordinario laboral promovido por el señor **JUAN DE JESÚS LÓPEZ MARULANDA** contra la **SOCIEDAD**

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PROTECCIÓN S.A.**

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 036**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

A N T E C E D E N T E S

Es materia de la Litis, decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada, contra el auto proferido por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de esta ciudad el día 25 de febrero de 2020, el cual liquidó e impartió aprobación a la liquidación secretarial de costas procesales impuestas en la respectiva instancia.

Al respecto, debe recordarse que el señor JUAN DE JESÚS LÓPEZ MARULANDA solicitó judicialmente el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez de origen común, junto con los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación de las condenas, lo que ultra y extra petita resulte acreditado en el proceso, y las costas judiciales, a cargo de la AFP accionada.

En sentencia del 22 de febrero de 2013, el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, DECLARÓ lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR que al Señor JUAN DE JESÚS LÓPEZ MARULANDA [...], le asiste el derecho a la Pensión de Invalidez de origen común a cargo de la AFP PROTECCIÓN S.A., a partir del 7 de Mayo de 2011, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR en consecuencia a la AFP PROTECCIÓN S.A., [...] a pagar la Pensión de Invalidez al Señor JUAN DE JESÚS LÓPEZ MARULANDA [...], debiendo liquidar el monto de las mesadas atendiendo la modalidad pensional seleccionada por el previsto pensionado, sin que en modo alguno sea el total de la pensión inferior al Salario Mínimo Legal vigente al 7 de Mayo de 2011, fecha a partir de la cual se causa el derecho.

TERCERO: CONDENAR a la AFP PROTECCIÓN S.A., al reconocimiento y pago a favor del accionante, de los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, liquidados sobre las mesadas pensionales causadas, a partir del 1° de Noviembre de 2011, hasta la fecha en que se produzca el pago efectivo del retroactivo causado.

CUARTO: DECLÁRANSE IMPRÓSPERAS las excepciones de mérito formuladas por el apoderado judicial de la entidad demandada, por lo expuesto en la parte motiva.

QUINTO: Se condena en COSTAS a la parte vencida en juicio. Líquidense por la Secretaría del Despacho el equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales actualmente vigentes.”

La sentencia de primera instancia fue conocida por este Tribunal de Distrito Judicial en apelación presentada por el apoderado judicial de la AFP PROTECCIÓN S.A., habiéndose proferido sentencia de segunda instancia el día 23 de julio de 2013, mediante la cual se confirmó lo resuelto por el juez de primer grado, y se condenó en costas procesales de segunda instancia a la parte demandada, fijándose como agencias en derecho la suma de \$589.500.

En desacuerdo con la sentencia de segunda instancia, el apoderado judicial de la parte demandada, presentó recurso extraordinario de casación, para ser conocido por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, alta corporación judicial, que mediante providencia del 4 de diciembre de 2019, dispuso NO CASAR la sentencia de segunda instancia, indicando frente a las costas procesales, que al no haber salido

avante la acusación y existir replica, estas debían estar a cargo de la administradora recurrente, fijándole como agencias en derecho la suma de \$8.000.000.

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA OBJETO DE ALZADA

Una vez surtido el recurso extraordinario de casación devuelto el expediente al juzgado de origen, la *A Quo* mediante auto del 25 de febrero de 2020, ordenó que a través de trámite secretarial se liquidaran las costas procesales, por las siguientes sumas:

- Agencias en Derecho en 1ª Instancia a cargo de la AFP PROTECCIÓN S.A., y a favor del señor JUAN DE JESÚS LÓPEZ MARULANDA la suma de **\$1.755.606** equivalente a 2 SMLMV.
- Agencias en Derecho en 2ª Instancia a cargo de AFP PROTECCIÓN S.A., y a favor del señor JUAN DE JESÚS LÓPEZ MARULANDA la suma de \$589.500 (apelación sentencia) + \$294.750 (apelación auto), para un total de **\$884.250.**
- Agencias en Derecho del recurso extraordinario de casación a cargo de sociedad AFP PROTECCIÓN S.A., y a favor del señor JUAN DE JESÚS LÓPEZ MARULANDA la suma de **\$8.000.000.**

TOTAL, a pagar: \$10.639.856.

En providencia de la misma fecha, se le impartió aprobación a dicha liquidación por parte de la *A Quo*.

El apoderado judicial de la parte demandada, **recurrió en reposición y apelación** el valor liquidado por concepto de costas procesales.

El juez de primera instancia, mediante auto del 23 de marzo de 2021, desató la reposición, declarándola improcedente, argumentando que la liquidación efectuada se encuentra ajustada a derecho, pues en la sentencia de primer grado se condenó a la AFP accionada al pago de costas procesales, como también ocurrió en la sentencia de segundo grado, y la providencia que resolvió el recurso extraordinario de casación, donde expresamente se estableció el valor de las agencias en derecho, además las agencias en derecho en primera instancia se liquidaron teniendo en cuenta el valor del salario mínimo legal mensual vigente para el año 2020, año en que se realizó la liquidación secretarial de las costas procesales.

A través de esa misma providencia, concedió el recurso de apelación ante esta Corporación, en el efecto suspensivo.

FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

Sustentó su inconformismo con la tasación de costas procesales, argumentando que debe disminuirse el valor fijado por concepto de agencias en derecho, pues esta suma de \$10.639.856, no es consecuente con una correcta aplicación de los criterios legales establecidos en el artículo tercero del Acuerdo 1887 de 2003, pues era necesario al momento de fijar las agencias en derecho valorar el actuar de los apoderados judiciales, el cual sin duda alguna, fue correcto, y resalta que en todo momento se actuó con lealtad procesal, sin olvidar que el proceso se resolvió en ambas instancias, en un tiempo prudente y nunca se entorpeció el curso normal del mismo.

Alegatos de conclusión

No se presentaron alegatos de conclusión en esta instancia.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Conforme a lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 365 del Código General del Proceso, las costas de un proceso corren a cargo de *“...la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto...”*.

Dicha disposición consagra un criterio objetivo que busca que las costas del proceso sean cubiertas por quien pierde el litigio, sin hacer distinción sobre la persona que debe correr con la obligación una vez se decida la litis.

Las costas del proceso comprenden, de un lado, los gastos judiciales que haya hecho la parte beneficiada con la condena y que aparezcan comprobados en el expediente y del otro, las agencias en derecho, en las que, para su fijación por el juez *“deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o éste y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas...”* (Artículo 366, numeral 4º del CGP).

De otro lado, el Acuerdo 1887 de 2003, modificado por el 2222 de diciembre 10 de 2003, emanado de la Sala Administrativa del

Consejo Superior de la Judicatura, establece como criterios para la fijación de tales emolumentos:

“ART. 3°— Criterios. *El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones.*

PAR.- En la aplicación anterior, además, se tendrán en cuenta las normas legales que en particular regulen la materia”

Seguidamente, en lo que toca con la tasación de las agencias en materia laboral, el mencionado acuerdo prescribe:

“2.1.1 A favor del trabajador:

Única instancia (...)

Primera instancia: *Hasta el 25% del valor de las pretensiones reconocidas en la sentencia. Si está, además, reconoce obligaciones de hacer, se incrementará hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes por este concepto.*

En los casos en que únicamente se ordene o niegue el cumplimiento de obligaciones de hacer, hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

(...).

PARÁGRAFO. *Si la sentencia reconoce prestaciones periódicas, hasta veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes”.*

2.6. RECURSOS.

2.6.1. ORDINARIOS. APELACIÓN DE AUTOS.

Hasta cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

2.6.2. EXTRAORDINARIOS.

2.6.2.1. Casación. *Hasta veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes.*

CASO CONCRETO

Vigencia de las normas reguladoras de la tasación de agencias en derecho en el Sub lite:

En el presente caso resulta aplicable la regulación establecida en el Acuerdo 1887 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura –referido en precedencia-, y no la del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de Agosto 2016, teniendo en cuenta que nos encontramos frente a una demanda presentada en el año 2012.

También destaca la Sala que, al tratarse de un proceso ordinario laboral de doble instancia, y resultar la sentencia de primera instancia desfavorable para los intereses de la AFP PROTECCIÓN S.A., el parágrafo del numeral 2.1.1 del artículo 6 del Acuerdo 1887 de 2003, establece con absoluta claridad que las agencias en derecho en primera instancia tratándose de procesos donde se reconocen prestaciones periódicas podrán ser tasadas por el administrador de justicia hasta en veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Y en el presente caso la condena por AGENCIAS EN DERECHO en la primera instancia (\$1.755.606) corresponde efectivamente a la suma de 2 SMLMV para la anualidad 2020 (\$877.803 x 2 = \$1.755.606), es decir, el valor fijado por el *A Quo*, se encuentra dentro de los topes a los que alude el parágrafo del numeral 2.1.1 del referido acuerdo, inclusive fue fijado en menos de la mitad del tope máximo permitido (20 SMLMV), pues de haberse aplicado este tope, la condena por agencias en derecho hubiese alcanzado la suma de \$17.556.060.

Lo mismo ocurrió con las agencias en derecho se segunda instancia, donde también aplica el referido párrafo, fijándose en la suma de \$589.500, equivalente a un (1) SMLMV para el año 2013, en que se profirió dicha sentencia, y también se fijaron como agencias en derecho la suma de medio salario mínimo legal mensual vigente en la providencia que resolvió el recurso de apelación contra el auto interlocutorio, las cuales están muy por debajo del tope máximo de hasta 5 SMLMV que permite el numeral 2.6.1. del Acuerdo 1887 de 2003.

Y respecto de las agencias en derecho liquidadas por la H. Corte Suprema de Justicia en providencia del 4 de diciembre de 2019 en la suma de \$8.000.000, debe decirse que las mismas también están ajustadas a las tarifas establecidas en el art. 6 del Acuerdo 1887 de 2003, concretamente en el numeral 2.6.2.1. que regula el valor de las agencias en derecho en los recursos extraordinarios de casación, indicándose allí que la cuantía puede llegar a ser de hasta veinte (20) salarios mínimos mensuales legales, y teniendo en cuenta que el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2019 fue la suma de \$828.116, el valor fijado por la Corte, viene siendo el equivalente a 9.66 SMLMV para el año 2019, es decir, una suma que sigue estando por debajo de la mitad del tope máximo permitido.

No son de recibo en consecuencia, los argumentos del recurrente en punto a que la tasación de las Agencias en Derecho ha debido ser una suma inferior a la fijada por el a quo, dado que el administrador de justicia goza de la discrecionalidad necesaria para tasar las agencias en derecho entre los topes permitidos por la Ley, y para ello puede observar, efectivamente, la gestión desplegada por el mandatario judicial, la complejidad del proceso, las excepciones

formuladas, el tiempo transcurrido en las instancias, entre otros. Resaltando la Sala que si bien en el presente proceso no se practicó ninguna prueba que por sus características resultase compleja, o por fuera del despacho judicial, y tampoco se presentaron incidentes procesales, ni fue necesaria la celebración de otras audiencias a las que normalmente se realizan en este tipo de procesos, las agencias en derecho fueron fijadas dentro del rango autorizado por el referido acuerdo, inclusive fijándose agencias por menos de la mitad permitida, de donde fluye con justeza, que su tasación se hizo conforme a derecho, haciendo uso de la discrecionalidad que otorga el mismo Acuerdo 1887 de 2003, para tasarlas.

Sin necesidad de mayores apreciaciones sobre el caso, se CONFIRMARÁ en todas sus partes la providencia que se revisa en apelación de fecha y origen conocidos.

Sin COSTAS en esta instancia.

D E C I S I Ó N

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**,

R E S U E L V E:

Primero. CONFIRMAR la providencia objeto de apelación, de origen y fecha conocidos, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Segundo. Sin Costas en esta instancia.

Se ordena notificar por **ESTADOS** lo resuelto, y devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados:


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL
Magistrada

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° 129 del 26 de julio de 2021.

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>